



Índice: AMR 34/0314/2019
06 de mayo de 2019

ASUNTO: CARTA ABIERTA A LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Estimadas candidatas, estimados candidatos a la Presidencia de la República de Guatemala,

Reciban un saludo cordial desde Amnistía Internacional, movimiento internacional no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo con más de siete millones de simpatizantes.

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, Amnistía Internacional se dirige a Ustedes para llamar su atención a los temas que la organización considera más preocupantes en materia de derechos humanos en el país y solicitarles reconocer y comprometerse públicamente a que, en caso de llegar a la presidencia, tomarán acciones en favor de los derechos humanos y de quienes los defienden. Para ello, es fundamental y necesario que su propuesta de plan de gobierno dé prioridad a los derechos humanos, incluyendo los siguientes temas y recomendaciones:

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Amnistía Internacional ha saludado logros históricos en la lucha contra la impunidad en años recientes, como los avances en los procesos penales y condenas contra personas responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional perpetradas durante el conflicto armado, y en destacados casos de corrupción que afectan el goce de los derechos humanos con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Estos avances, inimaginables hace una década por los niveles de impunidad imperantes en el país, evidencian que, con los esfuerzos y medidas apropiadas, el acceso a la verdad, la justicia y la reparación puede ser una realidad en Guatemala.

Sin embargo, Amnistía Internacional observa con preocupación las denuncias de ataques contra operadores de justicia y amenazas a la independencia judicial, la persistencia de obstáculos estructurales en los procesos penales, y las estrategias recientes desplegadas por parte de algunas autoridades para socavar la lucha contra la impunidad. Esta situación pone en riesgo la consolidación de un sistema de justicia eficaz que garantice los derechos de las víctimas. Es deber de las autoridades garantizar que las violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad, y por lo tanto Amnistía Internacional recomienda:

- Reiterar su compromiso con la continuidad de la lucha contra la impunidad, fortaleciendo las capacidades técnicas de los cuerpos de investigación en todo el país, dotándoles de recursos financieros adecuados, herramientas, capacitación y condiciones laborales que garanticen el ejercicio y la independencia de las funciones de los operadores de justicia.
- Proveer la investigación pronta, imparcial, independiente y efectiva de todos los casos de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado-incluyendo también la participación de las personas con responsabilidad de mando, y de aquellos casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos cometidas en la época post conflicto promovidos por la CICIG contra integrantes de redes criminales.
- Rechazar la adopción de amnistías incompatibles con el deber de Guatemala de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como aquella contemplada en la iniciativa de ley 5377.



- Garantizar con recursos idóneos y suficientes la seguridad de fiscales, jueces y magistrados, particularmente quienes tienen a su cargo los casos de violaciones de derechos humanos y otros casos de alto impacto, y abstenerse de promover medidas que pueden atentar contra la independencia judicial

ENTORNO SEGURO Y PROPICIO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Las personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala realizan su trabajo en un entorno hostil y peligroso: con frecuencia son objeto de campañas de estigmatización y difamación, sufren amenazas, o incluso son asesinadas por las actividades que llevan a cabo, particularmente aquellas que defienden los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. La mayoría de estos ataques permanecen en la impunidad. Las personas defensoras de derechos humanos también se enfrentan con procesos penales infundados promovidos con la intención de hostigarlos e impedir que continúen con su trabajo legítimo. Por lo anterior, Amnistía Internacional recomienda:

- Garantizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de todos los ataques, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, y llevar ante la justicia a todos los responsables tanto de carácter material como intelectual.
- Poner fin al uso indebido del sistema de justicia para intimidar, hostigar y desacreditar a las personas defensoras de derechos humanos mediante la apertura de procesos penales infundados.
- Asegurar la protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo, con la adopción e implementación de una política pública conforme a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia *Defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala*¹.
- Abstenerse de adoptar y promover normativas que limitan el trabajo de las y los defensores de derechos humanos y restringen indebidamente los derechos a la libertad de expresión y asociación, como la iniciativa de Ley 5257, y garantizar el derecho a la protesta pacífica.
- Reconocer públicamente, a través de una campaña pública difundida a nivel nacional, la labor legítima que realizan las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo aquellas que defienden derechos relacionados a la tierra, territorio y medioambiente.
- Abordar las causas estructurales de los conflictos sociales relacionados con la prospección y explotación de recursos naturales, sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular el derecho a la consulta previa, libre e informada para decidir sobre sus derechos relacionados al territorio y a un medio ambiente sano.

VIOLENCIA DE GÉNERO

El nivel de violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo alarmantemente elevado en Guatemala. Esta violencia incluye los asesinatos por razones de género llamados “femicidios” en la legislación guatemalteca, así como la violencia sexual, entre otras formas de violencia. Las cifras de embarazos de niñas y adolescentes evidencian la necesidad de contar con medidas institucionales adecuadas para prevenir la violencia sexual y garantizar el acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo el derecho a un aborto legal y seguro, información y educación sexual. Por lo anterior, Amnistía Internacional recomienda:

- Aplicar medidas efectivas y coordinadas para prevenir la violencia contra las mujeres, especialmente contra las jóvenes y las niñas; e intensificar los esfuerzos para la realización de investigaciones prontas, imparciales y efectivas sobre toda forma de violencia contra las mujeres.

¹ Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párr. 263.



- Garantizar el derecho a la vida y a la salud de las niñas y mujeres, asegurando su acceso efectivo a programas educativos y servicios de salud sexual y reproductiva.

La violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) también persiste. Estas personas son frecuentemente blanco de actos de discriminación y de ataques perpetrados con base en su orientación sexual y/o identidad de género, que en la gran mayoría de los casos permanecen impunes. En vez de garantizar sus derechos, el Congreso de la República ha promovido la adopción de normas que refuerzan la discriminación y la estigmatización en su contra como aquellas contenidas en la iniciativa legislativa 5272. Frente a esta situación, Amnistía Internacional recomienda:

- Adoptar e implementar políticas orientadas a promover el respeto de los derechos de las personas LGBTI y prevenir toda forma de violencia y de discriminación en su contra.
- Garantizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de todos los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos contra las personas LGBTI por motivo de su orientación sexual o identidad de género.

PENA DE MUERTE

La abolición/suspensión de la aplicación de la pena de muerte para los delitos comunes como consecuencia de la decisión de la Corte de Constitucionalidad en 2017 constituyó un paso importante para garantizar los derechos humanos en el país y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Guatemala. Siguiendo este impulso, Amnistía Internacional recomienda:

- Abolir inmediatamente la pena de muerte para todos los delitos.

El respeto, promoción, protección y efectivo disfrute de los derechos humanos de todas las personas, es la piedra angular sobre la que se sustenta el estado de derecho. Es además una herramienta fundamental con la que cuentan los Estados para garantizar que bajo su jurisdicción todas las personas puedan vivir con dignidad y sin discriminación, independientemente de su género, raza, origen étnico, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. De ahí la importancia de que todo gobierno y toda persona candidata a la presidencia de un país demuestre claramente su compromiso con la creación y consolidación de una sociedad más justa, libre e igualitaria.

Amnistía Internacional espera su compromiso expreso, claro y contundente en cada uno de los puntos aquí señalados antes de llegar al día de las elecciones.

Cordialmente,

Erika Guevara Rosas
Directora para las Américas
Amnistía Internacional